



Year 1901—Office, 21, Allen St.

Año 1901—Oficinas, calle Allen, 21

Official subscriptions .....	\$ 1.75 per month
Private .....	1.25 —
Single copy (date of issue).....	.10
— (old date).....	.20
Advertisements .....	.10 per line

Subscripción oficial por un mes.....	\$ 1.75
Subscripción particular por un mes.....	1.25
Número suelto del día.....	.10
Número atrasado.....	.20
Anuncios la línea .....	.10

Published daily except Mondays

Se publica diariamente menos los Lunes

Entered at the P. O. at San Juan, P. R. as Second class matter.

Year 1901

San Juan Puerto-Rico, Thursday September 19th

No. 219

### AVISO.

Con motivo de ser hoy día de recogimiento Nacional, no se publicará la "Gaceta" mañana viernes 20.

## PARTE OFICIAL

### Office of the Secretary OF PORTO RICO.

The Governor finds that the volume of executive business is such that he is obliged to establish regular hours in which to receive callers. He has therefore made the rule that callers will be received between ten and twelve o'clock in the fore-noon and from two to three in the afternoon.

All other business hours will be given to the transaction of office business.

### ADVERTISEMENT.

#### DEPARTMENT OF THE INTERIOR.

Office of the Board of Public Works.

San Juan, P. R. August 30, 1901.

Sealed proposals in duplicate for the furnishing, measuring and delivering of broken stone for the maintenance of roads in different localities of the island, will be received at this office until 3 P. M. September 30, 1901, and then publicly opened.

List of localities, specifications and other information will be furnished to bona fide bidders on application.

By direction of the Commissioner of the Interior

A. STIERLE,  
President Board of Public Works.  
8-6

### Departamento del Interior.

#### OFICINA DE AGRICULTURA Y MINAS.

#### ANUNCIO

San Juan, P. R., Septiembre 18 de 1901.

Habiendo presentado Mr. Henry D. Sayre una instancia en que solicita la inscripción de treinta y dos pertenencias mineras de oro y otros metales, bajo el nombre de "Rachel", en el barrio Cuchillas, jurisdicción de Corozal, en terrenos de la propiedad de Don Adolfo Velarde, le ha sido aquella admitida é inscrita en el registro minero con el número 169, siendo su demarcación la siguiente:

"Se tendrá como punto de partida el ángulo N. O. del balcón de la casa-habitación del Sr. Velarde y con R<sup>o</sup> 145° 60' centesimales se midieron ciento veinte y dos metros cincuenta centímetros y se pondrá el piquete número 1; desde éste en dirección N. E. R<sup>o</sup> 50° se medirán doscientos metros y se pondrá el piquete número 2; continuando en dirección N. O. R<sup>o</sup> 350° se medirán ochocientos metros y se pondrá el piquete número 3; siguiendo en dirección S. O. R<sup>o</sup> 250° se medirán cuatrocientos metros y se pondrá el piquete número 4; continuando en dirección S. E. R<sup>o</sup> 150° se medirán ochocientos metros y se pondrá el piquete número 5; y de éste en dirección N. E. 50° se midieron doscientos metros y llegará al piquete número 1;

quedando de este modo encerrada dentro del rectángulo descrito una superficie horizontal de treinta y dos hectáreas ó sean las pertenencias cuyo registro se solicita."

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, á fin de los que se crean perjudicados presenten sus reclamaciones en esta Oficina, dentro del plazo de sesenta días contados desde la fecha de este anuncio.

Luis Cuevas de Zequeira,  
Jefe interino de la Oficina de  
Agricultura y Minas.

## TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE PUERTO-RICO.

SENTENCIA.—En la Ciudad de San Juan Bautista de Puerto-Rico á seis de Julio de mil novecientos uno, en los autos que ante Nos penden en virtud de recurso de casación por infracción de ley, seguidos en el Tribunal del Distrito de Ponce por Don Pedro de Cardi y Novella, propietario, vecino de Yauco, representado y defendido en este Tribunal Supremo, primero, por el Letrado Don Rafael López Landrón y después, por su compañero Don Juan de Guzmán Benitez, con Don Tomás Olivari, también propietario y de la misma vecindad, representado y dirigido por el Letrado Don Herminio Diaz Navarro, sobre incidente de oposición al embargo preventivo de bienes de Cardi.

Resultando que á consecuencia de embargo preventivo practicado á instancia de Don Tomás Olivari en bienes de Don Pedro de Cardi, éste, en cuatro de Agosto del año próximo pasado presentó al Tribunal de Ponce escrito de oposición, en el que expuso que por auto de diez y seis de Julio anterior, dicho Tribunal había decretado por cuenta y riesgo de su acreedor Don Tomás Olivari embargo preventivo que éste había solicitado de sus bienes en catorce del mismo mes para garantizar el cobro de un pagaré por tres mil ciento diez y ocho pesos setenta y tres centavos, vencido en veintidos de Mayo anterior y suscrito con su nombre sin más razón que la de abrigar fundados motivos de que el deudor escondería sus bienes semovientes y trasmiría malbaratando los inmuebles al saber que contra él se procedería judicialmente, cuya solicitud reprodujo Olivari dos días después con la adición de que Cardi daba pasos para malbaratar sus bienes, no teniendo fundamento alguno los motivos alegados por Olivari en abono de su pretensión, pues el deudor tenía domicilio conocido en el pueblo de Yauco, contaba con bienes raíces y establecimiento agrícola en la jurisdicción del Tribunal de Ponce y no se había ocultado ni realizado acto alguno ó omisión que diera motivo racional para creer que ocultaría ó malbarataría sus bienes en daño de sus acreedores; por lo que, invocando como fundamentos de derecho los artículos 1398, por no estar comprendido en ninguno de sus casos, y 1414 de la Ley de Enjuiciamiento civil, solicitó se tramitara su pretensión en la forma correspondiente, recibéndola oportunamente á prueba, y en definitiva se dejase sin efecto el embargo practicado, condenando á Olivari á la indemnización de daños y perjuicios y al pago de las costas.

Resultando que formada pieza separada y dada comunicación á Don Tomás Olivari, la evacuó impugnando la pretensión de Don Pedro de Cardi, á cuyo fin alegó que Cardi estuvo entreteniéndolo desde el día del vencimiento de su obligación, ó sea desde el veintidos de Mayo de mil novecientos hasta momentos después de solicitado el embargo preventivo, para de ese modo celebrar ventas ó contratos simulados ó á título gratuito, esconder bienes, ofrecerlos en venta, hipotecarlos hasta el extremo de encontrarse ya reducido á la insolvencia, pues ha presentado solicitud de espera, que más bien debiera ser de cesión de bienes; que al ser requerido Cardi de pago antes de ejecutarse

el embargo preventivo, dijo que carecía de dinero efectivo, y en autos se consignó que no tenía bienes de preferente embargo no obstante poseer ganado vacuno, caballar y asnal que no fué hallado, parte del cual ha sido vendido, y parte embargado con posterioridad á instancia de Don Jorge Román, íntimo amigo de Cardi y con acuerdo de éste; que Cardi llevó su osadía hasta el punto de proponerle transacción para burlarse de ella luego, creyendo que el embargo preventivo no sería anotado en el Registro de San Germán antes que lo fueran las escrituras que hizo muy recientemente con daño suyo ó pretensión de causárselo y que por tanto abundaban los motivos para el embargo preventivo impugnado é invocando como fundamento de su derecho el artículo 1398 de la Ley de Enjuiciamiento civil, pues con la solicitud de embargo se presentó un pagaré del que resultaba la deuda, y existía motivo racional para creer que Cardi ocultaría ó malbarataría sus bienes en daño de su acreedor, concluyó solicitando se desestimara la oposición hecha por Cardi al embargo preventivo objeto de estas actuaciones, con imposición al mismo de las costas del incidente.

Resultando que recibido á prueba el incidente se practicaron las propuestas por las partes, habiendo dictado sentencia el Tribunal del Distrito de Ponce en ocho de Febrero último, por la cual dejó sin efecto el embargo preventivo practicado, condenando al actor Don Tomás Olivari al pago de todas las costas y á la indemnización de daños y perjuicios ocasionados á Don Pedro de Cardi.

Resultando que Don Tomás Olivari interpuso contra esa sentencia recurso de casación por infracción de ley autorizado por los números 1º y 7º del artículo 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, alegando como motivos: Primero. que la venta hecha por escritura pública de dos de Julio de mil novecientos, fecha intermedia entre veintidos de Mayo del mismo año en que venció el vale otorgado á favor de Olivari y el diez y seis de Julio citado, en que se decretó el embargo preventivo, de una casa de la propiedad de Cardi, sita en la calle principal del poblado de Guánica, término municipal de Yauco; la hipoteca constituida por Cardi en dicho intermedio de tiempo, ó sea por escritura pública de cinco de Julio citado sobre una finca rústica denominada "Tres hermanos," radica la en el barrio de "Indiera" del pueblo de Maricao, para garantizar una deuda de treinta y tres mil diez y siete pesos setenta y siete centavos provinciales, que Cardi confesó haber recibido de Don Alejandro Bartolomey; la no presentación cuando en diez y nueve y veinte de Julio se practicaron los embargos en Yauco y Maricao, de las cabezas de ganado que Cardi tenía inscritas á su nombre, para que de ese modo se embargaran inmuebles, sobre los que ya tenía gravámenes reales: la venta por Cardi á Bartolomey en escritura pública de treintuno de Julio de mil novecientos de los frutos pendientes y por venir de tres fincas rústicas denominadas "Tres hermanos," "Vicens" ó "Isabel" ubicadas en el término municipal de Maricao, para garantizar las sumas que le facilitaría Bartolomey con el fin de recolectar dichos frutos, cuyas sumas se calcularon en seis mil pesos oro; y por último el hecho de no habersele ocurrido á Cardi realizar los actos mencionados con autoridad al vencimiento de la obligación contraída á favor de Olivari eran hechos ó méritos más que suficientes para que el Tribunal del Distrito de Ponce hubiera estimado probado que Olivari tuvo motivos racionales para creer que Cardi trataba de ocultar sus bienes en perjuicio de aquél y al no estimarlo así cometió error de hecho en la apreciación de las pruebas constantes en documentos públicos, cuales eran las escrituras, certificaciones y diligencias de embargo obrantes en autos. Segundo: que también se cometió error de derecho en la apreciación de dichas pruebas por la Sala sentenciadora, puesto que no dió á los documentos públicos en que están constatadas su justo valor y su significación y alcance genuinos, con infracción de los artículos 1216 y 1218 del Código Civil. Tercero: que también se cometió error de derecho al no estimar la Sala senten-